



## COLOMBIA

### Tema de interés colectivo: Hacia un Marco Normativo para Prevenir la Corrupción en la Contratación Pública

Para la fecha (*Febrero de 2004*) el Gobierno Colombiano se encuentra adelantando una reforma al estatuto de contratación de la administración pública, el cual propende por generar mecanismos de transparencia, el mejoramiento de la gestión contractual y subsanar los vacíos normativos que han facilitado la ocurrencia de hechos de corrupción.

Así por ejemplo, se busca acabar con los regímenes excepcionales<sup>1</sup>, mediante la eliminación de aquellas normas que han creado mecanismos especiales de selección de contratistas para determinados sectores. De esta manera, los procedimientos de selección que establezca la ley 80 de 1993 se aplicarán en forma universal a quienes comprometan en su ejecución recursos públicos.

En materia de lucha contra la corrupción, el proyecto de ley propone, que los contratos derivados de la celebración de contratos o convenios ínter administrativos y ejecutados por las administraciones públicas cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales se rijan por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, de esta forma se acabaría la práctica de estas entidades que, valiéndose de las ventajas que ofrece para la selección y entrega de recursos tener el carácter de entidad estatal, a través de los convenios ínter administrativos, se han convertido en los grandes contratistas del Estado, -especialmente a nivel territorial-, sin importar que carezcan de calidades tales como idoneidad y experiencia requerida para la ejecución de contratos.

Así mismo, en lo relacionado con las organizaciones multilaterales, con el fin de generar una mayor transparencia, el proyecto pretende restringir la práctica de común usanza en muchas entidades del estado colombiano, cual es, la de entregar recursos por vía del concepto de "*administración de recurso*", para que dichos organismos den aplicación a sus reglamentos para la celebración de contratos por encima de la normatividad nacional, lo cual ha ocasionado el direccionamiento del manejo de recursos desde las entidades, en flagrante violación a los postulados rectores de la contratación estatal.

Con el fin de que las entidades puedan concentrarse en la valoración de aspectos técnicos, se entrega a las cámaras de comercio la carga de la verificación de la información concerniente a la capacidad jurídica, administrativa, operacional y financiera del proponente.

En aras de lograr una eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos públicos se propone crear una nueva causal de contratación directa, cual es la de contratación bienes, obras o servicios con características uniformes, la cual responde a una economía de escala, que propende por la necesidad de que los procedimientos para la selección de bienes que ya se encuentran estandarizados en el mercado puedan cumplirse en atención a las condiciones económicas de la propuesta.

En razón al interés general que debe prevalecer en los contratos que celebre la administración, además de ser un instrumento para la realización de los cometidos estatales, se propone que las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, se puedan aplicar en otro tipo de contratos diferentes a los señalados en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, como por ejemplo en contratos de consultoría

En relación con los contratos de obra y de consultoría, se propone, de una parte darle la posibilidad a la entidad de que analice la necesidad de una interventoría externa. De otra parte en los contratos de consultoría se define la gerencia de obra, con el propósito de mejorar su aplicación en la práctica contractual.

---

<sup>1</sup> Hoy por hoy existen aproximadamente 39 regímenes que se rigen por una normatividad diferente a la Ley 80, convirtiendo a esta última en un estatuto residual.

En aras de lograr la escogencia de la mejor oferta para los fines perseguidos por la entidad contratante, el proyecto propone una nueva redacción y contenido para el deber de selección objetiva, cuyo propósito esencial consiste en la depuración de los factores de escogencia en los procesos de selección, de tal manera que se privilegien las condiciones técnicas y económicas de la oferta, y la valoración de las ofertas se concentre en dichos aspectos.

Una de las principales aspiraciones de la reforma presentada, radica en el fortalecimiento a la eficiencia y la transparencia en la contratación estatal, y la propuesta de creación e implementación de un Sistema Electrónico Integral de Contratación Estatal, cuyo propósito es adecuar la administración a las nuevas tecnológicas, que conllevan a minimizar los tiempos y a facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y a la gestión y ejecución de los recursos públicos.

Se elimina el pago anticipado, excepto en contratos relacionados con la seguridad y defensa nacional y aquellos que defina el reglamento, con ello se pretende eliminar el abuso ejercido por parte de las entidades al aplicar el mismo injustificadamente.

Se propone establecer como juez competente para conocer de las controversias contractuales, el de la jurisdicción contenciosa, aún tratándose de los contratos celebrados con arreglo al derecho privado, exceptuándose para contratos de fiducia y encargo fiduciario, los celebrados por las entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social.

Con este proyecto modificatorio, el gobierno nacional persigue que se logre la optimización de la gestión contractual de la administración pública, en aras de regular eficientemente los recursos del estado, propendiendo en sus actuaciones por los principios fundamentales de transparencia, responsabilidad, selección objetiva y economía, lo cual en últimas se traduce en beneficio para los administrados.